



Rama Judicial del Poder Público

JUZGADO CINCUENTA Y UNO (51) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D. C.

Bogotá D.C., 17 FEB 2022

Ref.- Jurisdicción Voluntaria N° 2020 – 0630

De una nueva revisión al dossier, se evidencia que, la pretensión, impone una modificación sustancial del registro civil de nacimiento que, el padre del demandante, asentó ante el Registrador del Estado Civil del Municipio del Espino (Boyacá).

Ciertamente, de acogerse la corrección solicitada, el registro civil de nacimiento con indicativo serial 871220 (fl. 11), tendría, obligatoriamente, que declararse nulo, en medida que, si el demandante realmente nació en el Estado Bolivariano de Venezuela, pero, uno de sus padres es colombiano, también detenta la nacionalidad colombiana – ius sanguinis – ya no por el lugar del nacimiento – ius soli – sino por la relación de parentesco con un nacional patrio (art. 96, Const. Pol., y L. 43 de 1993). Sin embargo, el Decreto Ley 1260 de 1970, sobre tal particular, dejó en cabeza de determinados funcionarios el asentamiento de tal registro, veamos:

"(...) **Artículo 47.** Los nacimientos ocurridos en el extranjero o durante viaje cuyo término sea lugar extranjero, se inscribirán en el competente consulado colombiano, y en defecto de este, en la forma y del modo prescrito por la legislación del respectivo país.

El cónsul remitirá sendas copias de la inscripción; una destinada al archivo de la oficina central y otra al funcionario encargado del registro civil en la capital de la República, quien, previa autenticación del documento, reproducirá la inscripción para lo cual abrirá el folio correspondiente.

Caso de que la inscripción no se haya efectuado ante cónsul nacional, el funcionario encargado del registro del estado civil en la primera oficina de la capital de la República procederá a abrir el folio, una vez establecida la autenticidad de los documentos que acrediten el nacimiento".

Es decir, en éste caso, quién hizo el asentamiento del registro de un nacional colombiano – ius sanguini – fue un registrador sin competencia, acarreando la nulidad formal del acto registral (num. 1, art. 104, Dto. Ley 1260/70).

Acorde a lo anterior, el presente caso no implica una simple corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil o de nombre o anotación del

seudónimo en actas o folios del registro de aquel (num. 6, art. 18. CG del P), que es la competencia asignada a éste Estrado Judicial, sino que, en puridad, conlleva la anulación del registro civil.

Bajo tal tesis, se recuerda, el estado civil de una persona "(...) es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determinada (sic) su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley (...)" (Artículo 1º, Decreto 1260 de 1970), se deriva de hechos, actos y providencias que lo determinan, como también de su calificación legal (Artículo 2º, ídem). Aunque hay que reconocer que esa definición no ha sido pacíficamente considerada, por la doctrina nacional<sup>1-2</sup> ni por la jurisprudencia de las Altas Cortes<sup>3-4-5-6</sup>, ello dada su estrecha relación con temas como los atributos de la personalidad y la capacidad jurídica, también con la regulación probatoria que se hace a través del registro civil y las diversas acciones de tipo administrativo o judicial consagradas para la corrección, alteración y/o modificación del estado mismo y del documento que lo acredita.

Ahora la jurisprudencia de nuestro órgano de cierre en materia ordinaria<sup>7</sup>, refiere que las acciones tendientes a la modificación del estado civil de acuerdo con su fin pueden ser: (i) Impugnativas porque buscan que desaparezca la calidad civil obtenida falazmente; (ii) Reclamativas ya que persigue el reconocimiento de un estado civil que por derecho se tiene pero no está cualificado; (iii) Rectificadoras porque su objeto es corregir un yerro en el registro pero no implica cambio del estado civil; y, (iv) Modificadoras cuyo fin es mutar el estado legalmente reconocido, que pueden clasificarse en tres: (i) Porque ha variado gracias a un hecho sobreviniente y que por su naturaleza no requiere de una actuación judicial; (ii) Porque buscan rectificar y modificar yerros de tipo mecanográfico y ortográfico, trámites que son de índole administrativo. Y finalmente, (iii) porque propiamente buscan alterar el estado civil, pero que son competencia de los jueces y están expresamente estatuidas en los artículos 89 (Modificado por el artículo 2º del Decreto 999 de 1988), 91, 95, 96 y 97 del Decreto 1260 de 1970.

Con el fin de establecer si esa acción que busca la nulidad de ese documento es una modificación que propiamente altera el estado civil, es necesario traer a colación lo resuelto por el Consejo de Estado<sup>8</sup> en una acción de cumplimiento instaurada contra un notario que se negó la "corrección" del lugar y fecha de nacimiento, argumentos que fueron remembrados y utilizados por el Alto Tribunal Constitucional<sup>9</sup>, en sede de tutela al señalar:

<sup>1</sup> PARRA BENÍTEZ, Jorge y ÁLVAREZ G., Luz Elena. El estado civil y su registro en Colombia, Medellín, A., Librería Jurídica Comlibros, 2008, p.103 y ss.

<sup>2</sup> ARAMBURO RESTREPO, José Luis. Manual de derecho notarial, funciones y responsabilidades, Santafé de Bogotá DC, Legis Editores SA, 1999, p.243.

<sup>3</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Providencia del 25-08-2000, MP: Nicolás Bechara Simancas, expediente No. 5215.

<sup>4</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Providencia del 23-06-2008, MP: Pedro Octavio Munar Cadena, expediente No. 08001-22-13-000-2008-00134-01.

<sup>5</sup> CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 09-11-2006; CP: María Nohemí Hernández Pinzón, expediente No. 20001-23-31-000-2006-00381-01(ACU).

<sup>6</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Entre otras sentencias T-729 del 2011, T-485 de 2013 y T-063-2015.

<sup>7</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Providencia del 23-06-2008, MP: Pedro Octavio Munar Cadena, expediente No. 08001-22-13-000-2008-00134-01.

<sup>8</sup> CONSEJO DE ESTADO. ob. cit.

<sup>9</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-729 del 2011.



"En dicha providencia el Alto Tribunal consideró: *"Por último, existen otras clases de cambios que suponen la alteración del estado civil, que precisan la intervención del juez para poderse realizar, tal es el caso del cambio de lugar y fecha de nacimiento que persigue la demandante, pues claramente incide en su nacionalidad, por lo tanto dicha modificación no puede disponerla el notario a través de escritura pública, como lo pretende la actora, sino que debe ser autorizada por el juez civil del proceso de jurisdicción voluntaria regulado en el artículo 649, numeral 11 del Código de Procedimiento Civil.*

(...)

*De conformidad con lo dispuesto por la norma citada, la corrección del lugar de nacimiento no procede mediante escritura pública, ya que esta corrección implica una alteración en el estado civil y una violación a las normas de circunscripción territorial (artículo 46 del Decreto Ley 1260 de 1970)."*

*Lo anterior permite a la Sala concluir que la obligación endilgada por la actora a la autoridad pública demandada no existe, PUES LAS CORRECCIONES QUE PRETENDE MATERIALIZAR EN SU REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO NO LE CORRESPONDEN DIRECTAMENTE A LOS NOTARIOS, SINO QUE PRECISAN DE UN PROCESO JUDICIAL PREVIO, DISEÑADO PRECISAMENTE PARA LOGRAR LA ALTERACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS"*

(...)

*...dentro de una acción de cumplimiento, ello sin tener en cuenta que en dicha providencia el Alto Tribunal, SEÑALÓ QUE EL CAMBIO DEL LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO SUPONE LA ALTERACIÓN DEL ESTADO CIVIL, PORQUE EN EL CASO CONCRETO EXAMINADO DICHA MODIFICACIÓN INCIDÍA EN LA NACIONALIDAD DE LA DEMANDANTE... (Subrayado, sangría y bastardilla propios del texto constitucional). (Versalitas propias del Despacho).*

En ese orden de ideas, acorde con lo dicho por la jurisprudencia, la nulidad que se pretende en este asunto, altera el estado civil de la actora y ello evidencia que la competencia es del juez de familia, acorde con el numeral 2, del artículo 22 del CGP. Por lo tanto, a pesar de que el asunto no está enlistado dentro de los trámites específicos asignados a los jueces de familia, lo cierto es que debe ventilarse por el procedimiento de la jurisdicción voluntaria (Artículo 577-9º, CGP), dado que la modificación pretendida no es de aquellas de rectificación como la corrección, la sustitución o la adición del registro civil (Competencia trasladada hoy a los jueces municipales, artículo 18-6º, CGP), porque, se itera, realmente altera el estado civil (Artículo 22-2º, CGP).

Además, los procesos de jurisdicción voluntaria, como lo recuerda la doctrina del profesor Azula Camacho<sup>10</sup>, buscan dar efectividad, integrar o constituir determinado estado o situación jurídica a favor de un (os) sujeto (s), sin que necesariamente en esa realidad o entre ellos, medie litigio, tal como ocurre en este caso con el estado civil de la actora. Esa posición, es consecuente a lo decidido, en un conflicto de competencia, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en reciente decisión (2015)<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, tomo V, cuarta edición, editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 1998, p.139.

<sup>11</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Auto AC2449-2015 del 12-05-2015, MP: Jesús Vall de Rutén Ruiz.

Es por lo anterior, que, con apoyo en los artículos 16 y 139 del CG del P, se ordenará la remisión del expediente ante los Jueces de Familia del Circuito de Bogotá, para su conocimiento, previa la declaración de falta de competencia de éste Juzgado.

Acorde a lo anterior, se **DISPONE**:

1. **DECLARAR** la falta de competencia de éste Juzgado para continuar conociendo del presente trámite.
2. **ORDENAR** la remisión del proceso en el estado en que se encuentra, ante los Jueces de Familia del Circuito de Bogotá – Reparto. **Ofíciase**.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**HERNANDO GONZÁLEZ RUEDA**  
Juez

AFO

JUZGADO 51 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
Secretario
Notificación por Estado
La providencia anterior se notificó por anotación en estado N° <u>32</u> fijado hoy _____ a la hora de las _____
8.00 A.M.
Oscar Mauricio Salazar Cortes
Secretario

18 FEB 2022